SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 23/2013

Recomendación N°	23/2013
Autoridad Responsable	Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Expediente	1VQU-420/2013
Fecha de emisión/	20 DE NOVIEMBRE DE 2013
HECHOS	
Q1, manifestó en su queja ante este Organismo, que el 10 de agosto de 2013, aproximadamente a las 21:00 horas, se encontraba en compañía de V1 y Q2, su hermano y madre respectivamente, en el interior de su domicilio, cuando en ese momento arribaron a la casa contigua, dos patrullas de la Policía Estatal de la cual descendieron varios agentes y se llevaron detenido a V2; por ese motivo V1 se acercó con los familiares del detenido a ofrecer su ayuda. La quejosa refirió que minutos después llegaron otras siete patrullas de la Policía Estatal y se estacionaron frente a su domicilio, de las que descendieron cerca de 15 elementos y uno de ellos se dirigió hacia V1 para detenerlo, por lo que ella hizo el intento de evitar la detención de su hermano pero el policía le dio una patada y se llevó a V1 a bordo de una patrulla, retirándose también las otras unidades. En su queja, V2 manifestó que a las 21:00 horas del 10 de agosto del año en curso, se encontraba en compañía de T1, T2 y T3 en el interior de su domicilio, cuando varios agentes de la Policía Estatal, sin motivo ni orden de autoridad, ingresaron a su casa con violencia y procedieron a detenerlo. Refirió que fue llevado a un terreno baldío en la Colonia Primero de Mayo, y en ese lugar fue golpeado e interrogado debido a que una persona que acompañaba a los policías lo señalaba como integrante de un grupo delictivo; después los aprehensores lo llevan de regreso a su fraccionamiento y observa que los Policías Estatales detuvieron a V1, y luego trasladan a los dos al Edificio de Seguridad Pública. El agraviado refirió que al llegar al estacionamiento del citado Edificio, escuchó que los policías bajaron de la patrulla a V1 y comenzaron a golpearlo, al mismo tiempo que le preguntaban sobre una “casa de seguridad”; así pasaron cerca de treinta minutos cuando escuchó que V1 comenzó a solicitar auxilio y pedir oxígeno, enseguida una voz de mujer preguntó a los policías si ya se había muerto, luego escuchó la sirena de una ambulancia, y después de ello lo trasladan a una de las celdas de la Policía Estatal. Por su parte, Q2 señaló que fue a las 07:00 horas del día siguiente de la detención de V1, 11 de agosto, cuando recibió información en el sentido de que el agraviado había fallecido a consecuencia de un infarto. Tanto Q1 como Q2 refieren que acudieron al reconocimiento del cadáver, y observaron que en el certificado de defunción se anotó como una de las causas de la muerte traumatismo intenso de abdomen, por lo que pidieron a la Comisión Estatal se investigaron estos hechos, en particular porque se había manejado en la opinión pública que el fallecimiento se originó por una caída de su propia altura. Con relación a los hechos antes descritos, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa Dos, Especializado en Delitos de Alto Impacto inició la Averiguación Previa 1, por el delito de homicidio en agravio de V1, dentro de la cual resolvió ejercer la acción penal en contra de AR1, elemento de policía de Seguridad Pública del Estado, por el delito de homicidio calificado. Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 1VQU-420/2013, dentro del cual declaró a quejosos, víctima y testigos, obtuvo copias certificadas de la Averiguación Previa 1 y de la Causa Penal 1, solicitó y obtuvo informes de la autoridad involucrada, además de realizar trabajo de campo; evidencias que en su conjunto serán motivo de análisis en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación.	

Derechos Vulnerados	✓ A la vida. ✓ A la integridad y Seguridad personal. ✓ A la inviolabilidad del domicilio.
OBSERVACIONES	
Esta Comisión Estatal precisa que no se opone a la prevención y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de su combate se vulneren derechos humanos; por ello, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones que en derecho correspondan. La actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos de cualquier persona; por tanto, esta Comisión hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-0420/2013, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la vida y a la integridad personal en agravio de V1, así como los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad y seguridad personal, en agravio de V2, por actos consistentes en privación de la vida, tortura y ejercicio indebido de la función pública, atribuibles a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención a las siguientes consideraciones: El 12 de agosto de 2013 esta Comisión Estatal recibió la queja de Q1, en la cual refirió que el 10 de agosto del año en curso, V1 fue detenido por elementos de Seguridad Pública del Estado en el exterior de su domicilio, después de que los policías se habían introducido al domicilio de su vecino V2 y también lo habían detenido. También se recibió queja de Q2, quien señaló que la autoridad en ningún momento le proporcionó información sobre la detención de su hijo, y que fue hasta las 07:00 horas del día siguiente que le dijeron que su hijo había fallecido a consecuencia de un infarto. De las declaraciones que al efecto proporcionaron Q1, Q2 y T1, se advierte que fueron coincidentes en señalar que el día de los hechos se percataron que V2 fue sustraído del interior de su domicilio, por elementos de la Policía Estatal, sin que hayan mostrado una orden de detención, observando que sufrió maltrato al momento que lo subieron a la patrulla. Incluso Q1 y Q2 refieren que minutos después los policías regresaron y detuvieron a V1, lo que Q1 trató de impedir sin lograrlo. Las anteriores declaraciones guardan concordancia con lo que señaló V2 al momento que fue detenido, al señalar que estaba en el interior del domicilio y que los agentes de policía lo sacaron del mismo. Refirió que fue golpeado desde el momento que lo aprehendieron, y que lo llevaron a un terreno baldío, donde lo interrogaban sobre su participación en un acto ilícito. Después relató que los policías regresaron a la colonia y detuvieron a V1, quien era su vecino, y los trasladan al edificio de Seguridad Pública, lugar donde los policías golpeaban a V1, mientras le preguntaban sobre “una casa de seguridad, hasta el momento que la víctima decía que le faltaba aire y después escuchó que había fallecido. La versión de V2 encuentra apoyo con el certificado médico que se le practicó, en el cual se advierte que presentó lesiones eritematosas pequeñas en región escapular derecha y región lumbar, ligero aumento de volumen en pómulo y región mandibular izquierdas, eritema en región epigástrica, ligero aumento de	

volumen en labio superior, lesiones que guardan concordancia con su declaración y que son contemporáneas con la detención, aunado a que no hay evidencia que haya ofrecido resistencia al arresto para que se explicara el uso de la fuerza pública.

Ahora bien, en su informe, los agentes aprehensores AR2, AR4 y AR5, fueron coincidentes en señalar que procedieron a la detención de V1 y V2, por indicaciones de AR1, quien entonces fungía como su jefe de área, además de participar en las mismas. En el parte informativo que se rindió sobre la detención de las víctimas, se asentó que se realizó debido a que tanto V1 como V2 habían sido señalados por una persona detenida horas antes en las inmediaciones del mercado república de esta ciudad, y en cuyos hechos habían resultado heridos dos policías por proyectiles disparados por arma de fuego.

No obstante lo anterior, la autoridad omitió aportar evidencia para corroborar lo que señaló en su parte informativo, y que generase convicción sobre los hechos ocurridos, ya que en primer término se evidenció que no se mostró orden emitida por autoridad competente para proceder a la detención de los agraviados, incluso que V2 fue sacado de su domicilio, aunado a que de las declaraciones de V2, se obtuvo que los aprehensores lo interrogaban, tanto a él como a V1, sobre su participación en el acto criminal que refirió la autoridad en su informe.

Ahora bien, es de llamar la atención que en la declaración que rindieron dentro de la Averiguación Previa 1, AR1, AR2, AR4 y AR5, fueron coincidentes en señalar que cuando llegaron con los detenidos V1 y V2 al estacionamiento del edificio de Seguridad Pública, V1 solicitó acudir al servicio de baño y que en el interior del mismo resbaló debido al piso mojado, después refirió dolor y se desvaneció, por lo que llamaron al médico de la corporación, quien les señaló que V1 había fallecido. En el caso de V1, manifestó que no participó en la detención, pero que observó cuando sus compañeros llegaron al estacionamiento con los detenidos y se percató cuando V1 solicitó a AR1 que lo llevara al baño.

Posteriormente, en ampliación de declaración que se recabó dentro de la Averiguación Previa 1, AR4 y AR5 modifican su primera declaración para precisar que al momento que llegaron con los detenidos V1 y V2 al estacionamiento, AR1 procedió a bajar de manera abrupta a V1 de la patrulla y lo golpeó en el rostro, para luego tumbarlo en el piso, y estando en el suelo AR1 se dejaba caer de rodillas sobre el pecho y abdomen de V1 cuando menos en tres ocasiones, que AR5 le pidió que se calmara sin que fuera atendida su petición, y que después V1 ingresó al baño y al salir se desvaneció, por lo que se pidió auxilio a personal médico quien proporcionó maniobras de reanimación cardiopulmonar, y al no responder declaró el fallecimiento de V1.

Si bien es cierto que AR4 y AR5 modificaron en parte la primera versión de los hechos que habían rendido dentro de la Averiguación Previa 1, también lo es que su declaración guarda estrecha concordancia con lo que manifestó V2, cuando señaló que cuando V1 fue bajado de la patrulla al llegar al estacionamiento del edificio de Seguridad Pública, escuchó que lo estaban golpeando, lo interrogaban sobre “una casa de seguridad”, que V1 refería que la faltaba aire, y después una voz de mujer señaló que había fallecido.

Lo anterior también se fortalece con el informe que rindieron elementos de la Policía Ministerial del Estado de la Unidad de Delitos contra la Integridad Corporal el 13 de agosto de 2013, en el cual precisan que las lesiones que presentó V1 no corresponden una caída de su propia altura.

De manera congruente, el certificado de autopsia refiere que V1 presentó equimosis verdosa y regular de 5 centímetros en el flanco abdominal izquierdo, equimosis violáceas irregulares de 6 por 5 centímetros en la rodilla derecha, escoriación dermoepidérmica de 1.5 centímetros en la cara anterior del tercio proximal de la pierna derecha, escoriación dermoepidérmica regular de 5 milímetros en la rodilla izquierda, estallamiento esplénico y el bazo con desgarros múltiples, y la causa del fallecimiento fue choque hipovolémico causado por laceración esplénica y trauma profundo de abdomen.

En el dictamen pericial de Mecánica de Lesiones, el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, precisó que las lesiones externas que presentó V1, en la traumatología forense, corresponden a lesiones contusas, y debido a la magnitud de la fuerza aplicada, a la gravedad de las descritas en el interior de la cavidad abdominal, son de las que de manera necesaria y directa producen la muerte, aunado a que son de las que se producen por objetos romos, sin punta ni filo, como pueden ser patadas, puñetazos, palos o tubos.

Además de lo anterior, el citado médico legista, en su comparecencia de 13 de agosto de 2013 en la Averiguación Previa 1, explicó que la laceración esplénica y trauma profundo de abdomen se consideran como causa de muerte, pues derivan de un daño al órgano llamado bazo, y que un trauma profundo de abdomen causa laceración en el órgano citado, que en el caso provocó una hemorragia profunda y abundante. Que las demás lesiones que presentó V1, como la equimosis localizada en el flanco abdominal izquierdo, guarda correspondencia con el trauma directo externo que ocasionó la lesión en el bazo, y que las equimosis y escoriaciones en ambas rodillas, así como en la cara anterior de la pierna derecha pueden corresponder a la presión y deslizamiento con un objeto con contusión.

En suma, de los elementos que se integraron al expediente de queja permiten advertir que V1 se encontraba con vida al momento en que llegó al estacionamiento del Edificio de Seguridad Pública, que recibió golpes contusos en el flanco izquierdo de su cuerpo que le provocaron un trauma profundo de abdomen con laceración del bazo, lo cual le generó la pérdida de la vida, circunstancia que sin duda amerita una investigación clara y profunda, sobre todo por la participación en los hechos de servidores públicos.

Es importante también que se investigue la circunstancia de que V1 se encontraba esposado, como lo señaló V2, lo cual pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en que se encontraba V1 ante sus agresores; incluso, ello hace suponer que no ofrecía resistencia a la detención, lo cual es indicativo de que la acción que se desplegó contra su integridad fue irracional.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal observa que existen elementos suficientes para acreditar que la privación de la vida de V1 ocurrió estando a disposición de elementos de Seguridad Pública del Estado, quedando en evidencia el ejercicio abusivo del poder por parte de los policías que actuaron en su carácter de servidores públicos, y que la víctima estaba en situación de desventaja con respecto a ellos, ya que existen datos que al momento que recibió los golpes de AR1 se encontraba esposado, por lo que es de suma importancia que los hechos sean investigados de manera efectiva para que en su oportunidad se determine la responsabilidad penal en la que incurrieron y que el caso no quede impune.

Cabe mencionar que el derecho a la vida se erige como uno de los valores superiores del ser humano y constituye la base de su dignidad; por tanto, es un derecho humano primario, sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia alguna. Este derecho impone la obligación a toda autoridad de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como de minimizar los riesgos eventuales que pongan en peligro la vida con motivo de las actividades desarrolladas por los cuerpos policiales.

Por otra parte, tampoco pasa inadvertido para este Organismo Estatal que con relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, se encontraron elementos suficientes que hacen presumir que V2 fue sustraído del interior del domicilio, por elementos de Seguridad Pública del Estado, sin que existiera orden de autoridad competente para poder realizarlo.

Sobre el particular, existe la declaración de V2, cuando refiere que lo sacaron de su domicilio, así como los testimonios de Q1 y Q2, quienes fueron coincidentes en señalar que el día de los hechos vieron salir a policías estatales del domicilio de V2, su vecino, a quien llevaban detenido, lo cual se corrobora con lo señalado por T1, quien afirmó que los agentes de policía sacaron de su recámara a V2.

Ahora bien, estos hechos son imputables a AR1, AR2, AR4 y AR5, quienes reconocen haber detenido a V2,

incluso, en su declaración, AR3, menciona que vio llegar a los mencionados con V1 y V2 en calidad de detenidos al edificio de Seguridad Pública. Asimismo, se concatena lo que señaló AR1, de que procedió a la detención de los agraviados en razón de existir un señalamiento directo de otra persona que participó en un hecho ilícito en el mercado república de esta Ciudad.

Aunado a lo anterior, la autoridad no aportó evidencia de que la detención se hubiera realizado en alguna de las formas que se señalan en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que hubiere existido urgencia del caso o flagrancia en la detención. La autoridad fue omisa en aportar evidencia para demostrar que contó con orden de autoridad competente, tanto para proceder a la detención, como para ingresar al domicilio de V2.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye una prerrogativa fundamental de protección de la persona, para garantizar el ámbito de su privacidad, dentro del espacio limitado que elige, y que se caracteriza para evitar agresiones injustas del exterior, de otras personas o de la autoridad pública. El domicilio es un espacio en el cual la persona vive y ejerce su libertad más íntima. La inviolabilidad del mismo impone como requisito, para efectuar cualquier penetración, una orden de autoridad judicial, lo que en el presente caso no ocurrió.

El domicilio y la vida privada y familiar están intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar. Por tanto, también debe investigarse y en su oportunidad determinar la posible responsabilidad en que pudieron haber incurrido los elementos aprehensores de la introducción sin derecho al domicilio de V2, así como también de los ataques a su integridad personal, ya que presentó lesiones que fueron contemporáneas con su detención, mismas que se señalaron en el certificado médico que se le practicó, circunstancia de la cual, los agentes de policía tampoco explicaron ni informaron de las lesiones que presentó V2, incluso el agraviado identificó y señaló a AR1 como la persona que le propinó un cachazo a la altura de su oído izquierdo.

La evidencia permite acreditar que V2 fue víctima de maltrato durante la detención, vulnerándose su derecho a la integridad y seguridad personal, ya que la autoridad aprehensora tiene la obligación de garantizar en todo momento, de su guarda, salud, integridad y seguridad personal desde su captura, lo que en el presente caso no aconteció.

En otro aspecto, de acuerdo con los testimonios que se recabaron, tanto los que vertieron los agentes de seguridad pública en ampliación de declaración, el que rindió V2, así como los dictámenes periciales, concatenados entre sí, permiten advertir que existen elementos para considerar que se cometieron actos de tortura en agravio de V1, ya que se le infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos físicos graves, con el fin de obtener una información sobre su presunta relación en un acto ilícito o su vínculo con un grupo criminal, vulnerando con ello lo que establecen los artículos 1, de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, y 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El bien jurídico que tutela la tortura es la seguridad e integridad personal frente a quienes prestan un servicio público, y en el presente caso, los agentes de policía, garantes de la conservación del orden y seguridad pública, tenían la obligación de proteger a las personas en el ejercicio de sus funciones, lo que no aconteció, ya que se causó dolor y muerte a V1 para obtener datos de la supuesta participación en un hecho ilícito, acción reprobable que es necesario que se investigue de oficio al adecuarse con la descripción del tipo penal que señala el artículo 282 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 3 y 11 de la Ley para prevenir y Sancionar la Tortura.

La investigación no solo debe involucrar al o los servidores públicos que participaron en el acto de tortura en contra de V1, sino también a los agentes de policía que se encontraban presentes el día de los hechos y que no

intervinieron para impedir el acto ilícito que se estaba cometiendo, ya que tenían el deber de proteger sus derechos humanos, sobre todo porque estaba bajo su guarda y custodia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ya que con su actitud omisa toleraron el acto de tortura y la consecuente privación de la vida.

En efecto, la autoridad debe continuar la investigación de las conductas en que pudieran haber incurrido AR2, AR3, AR4 y AR5, tanto administrativa como penal, ya que estuvieron presentes en el lugar en que perdiera la vida V1, sobre todo tomando en consideración las declaraciones de AR4 y AR5, que habiendo observado que AR1 golpeaba a la víctima, nada hicieron para impedirlo; además, debe investigarse que los policías en el parte informativo señalaron que V1 cayó de su propia altura y se desvaneció.

Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley, son garantes de la seguridad pública, la cual tiene como fin salvaguardar la integridad, el deber de apegarse orden jurídico, respetar los derechos humanos, abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, lo que en el caso no aconteció, al evidenciarse que no intervinieron para impedir la agresión que ocasionó la muerte de V1, apartándose de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Tampoco observaron lo establecido en los artículos 1.1, 4.1, 5.1, 5.2, y 7.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1, 7, 9.1, y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2.1, 2.3 y 4.2 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 2, 3 y 4, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los que señalan la obligación de respetar los derechos, la vida, la dignidad de las personas privadas de la libertad, la integridad y seguridad personal; que nadie sea sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; se tomen medidas para prevenir, impedir y sancionar los actos de tortura.

También se apartaron de lo dispuesto en los artículos 3 y 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 2, 3, 5 y 8, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley; 4, de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; los principios 6, 7 y 34 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y el numeral 1 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los protegen los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad personal; que las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad, y no ser sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; se les proteja contra todo tipo de amenazas y castigos corporales; que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben proteger y defender la dignidad y derechos humanos de las personas, y no infligir o tolerar actos de tortura o tratos crueles.

De igual manera, los elementos de seguridad pública, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 38, segundo párrafo y 56, fracciones I, III, VIII y XI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, los cuales establecen el deber de respetar y proteger la integridad y dignidad humana, observar el respeto de los derechos humanos, respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su cargo, así como evitar infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes.

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los elementos de seguridad pública del Estado, pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cual establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo. Por tanto, es pertinente que se de vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública para que inicie la investigación correspondiente y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda.

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño.

Por su parte, los artículos 61, 62, 63, 64 y 73, de la Ley General de Víctimas, señalan que las víctimas tienen derecho a que se les repare de manera integral y efectiva el daño sufrido a consecuencia de la violación a derechos humanos, lo que comprende medidas de restitución, compensación, así como garantía de no repetición; y que las víctimas serán compensadas en los términos que determine la resolución que emita el organismo público de protección de los derechos humanos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que los mismos hechos, materia del pronunciamiento, pudieran implicar.

Resulta pertinente mencionar que la reparación del daño tiene como fin revertir, en la medida de lo posible, los efectos de una violación a un derecho o, en su defecto, asegurar que se tomen las medidas necesarias para aminorar los resultados de dicha violación. En ciertos casos, la reparación del daño también tiene como fin evitar que se repitan los hechos o situaciones que generaron la violación de derechos. De acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la reparación debe ser: adecuada, efectiva y proporcional a la gravedad de la violación y del daño sufrido.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se proceda a la reparación del daño en favor de los familiares de V1, o de quien acredite tener derecho, que se traduzca en una compensación justa y equitativa, la cual incluya el tratamiento psicológico necesario para restablecer su salud emocional.

SEGUNDA. Se proceda a la reparación del daño en favor de V2, dentro de la cual se incluya el tratamiento médico y psicológico que requiera para restablecer la salud física y emocional.

TERCERA. Se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas.

CUARTA. Se colabore ampliamente en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia en el caso, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal que se encuentra en trámite sobre los hechos en que perdiera la vida V1.

QUINTA. Se incluya en el programa de capacitación permanente a los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el tema de derechos humanos, en particular, los derechos que prevalecen durante la detención, así como de prevención de la tortura.